

AUTO N. 01343

“POR EL CUAL SE DECRETAN LA PRÁCTICA DE PRUEBAS Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades delegadas por la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del 4 de mayo de 2009, en cumplimiento de la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, la Ley 1333 del 21 de julio 2009, el Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974, el Decreto 948 del 5 de junio de 1995, compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 del 26 de mayo de 2015, la Resolución 627 del 7 de abril de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actualmente de Desarrollo Sostenible, Ley 1437 de 18 de enero de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Código General del Proceso y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, encontró mérito suficiente para dar inicio al proceso sancionatorio ambiental mediante el Auto No. 02622 del 17 de octubre de 2013, en contra de la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No 53.068.398, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER**, registrado con matrícula mercantil No. 02122548 del 21 de 2011, ubicado en la calle 151C No 114 D-08 de la localidad de Suba de esta Ciudad, en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Que, el anterior Auto, fue publicado en el Boletín Legal de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 07 de octubre de 2015, comunicado al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios 2013EE163145 del día 02 de diciembre de 2013 y, notificado personalmente a la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.068.398, el día 17 de abril de 2015.

Que, a través del Auto No. 05573 del 30 de octubre de 2018, expedido por la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, se dispuso:

(...)

“ARTÍCULO PRIMERO. - Formular en contra de la señora **SHIRLYS JOHANA OBANDO CAMARGO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 53.068.398, registrada como persona natural bajo la matrícula mercantil No. 02122546 del 21 de julio de 2011, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER**, registrado con matrícula mercantil No. 02122548 del 21 de julio de 2011 y ubicado en la calle 151 C No. 114 D - 08 , de la localidad de Suba de esta Ciudad, el siguiente Pliego de Cargos, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, así:

Cargo Primero. - Por generar ruido que traspasó los límites establecimiento de comercio denominado LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER, registrado con matrícula mercantil No. 02122548 del 21 de julio de 2011 y ubicado en la calle 151 C No. 114 D - 08 , de la localidad de Suba de esta Ciudad, mediante el funcionamiento de un sistema de sonido compuesto por una (1) rockola y dos (2) cabinas (baffles), según el concepto técnico No.04734 del 23 de julio de 2013, presentando un nivel de emisión de 65.3 dB(A) en horario nocturno, para un sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, sobrepasando el estándar máximo permitido de emisión de ruido en 10.3 dB(A), en donde lo permitido es de 55 decibeles en horario nocturno, vulnerando con ello el artículo 45 del Decreto 948 de 1995, actualmente compilado en el artículo 2.2.5.1.5.4 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con la tabla No. 1, artículo 9 de la Resolución 627 de 2006.

Cargo Segundo. - Por generar ruido en la calle 151 C No. 114 D - 08 , de la localidad de Suba de esta Ciudad, clasificado como un Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado, donde no se permite la construcción o funcionamiento de establecimientos comerciales susceptibles de generar y emitir ruido que pueda perturbar la tranquilidad pública, vulnerando de esta manera el artículo 48 del Decreto 948 de 1995, actualmente compilado en el artículo 2.2.5.1.5.7 del Decreto 1076 de 2015, en concordancia con la tabla No. 1°, artículo 9° de la Resolución 627 de 2006.

(...)

Que, el anterior acto administrativo fue notificado personalmente a la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No. 53.068.398, el día 06 de diciembre de 2018.

II. DESCARGOS

Que, mediante Radicado No. 2018ER293958 del 12 de diciembre de 2012, la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.068.398, presentó escrito de descargos y solicitud de pruebas contra el Auto No. 05573 del 30 de octubre de 2018, dentro del término establecido en la ley, las cual solicito tener en cuenta dentro del presente proceso sancionatorio ambiental:

(...)” Por medio del presente doy a conocer los cambios que he realizado en mi cigarrería, **LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER**, matricula No 02122548 ubicado en la calle 151 c No 114 D 08 localidad Suba. A la fecha ya se han realizado varias remodelaciones para que el sonido no se expanda hacia la calle, para esto se colocó una contrapuerta corrediza, en las ventanas se

instaló laminas de icopor doble, así misma cobertura en madera triplex y se cambiaron los parlantes de tamaño pequeño, para un ruido sea moderado.

(...)

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES

El régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso y el derecho a la defensa, en virtud del cual, *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”* y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que, el debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas. Es considerado este derecho como parte esencial y fundamental del Estado Social de Derecho y de sostenimiento de la Democracia, porque impide las arbitrariedades de los gobernantes con los ciudadanos.

“Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. Su importancia en el contexto de las garantías procesales radica en que con su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado.” **Sentencia C-025/09, La Sala Plena de la Corte Constitucional Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil nueve (2009).**

DEL PROCEDIMIENTO – DE LA LEY 1333 DE 2009 Y DEMÁS NORMAS

Que, desde el punto de vista procedimental, se tiene en cuenta que con base en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad Ambiental está investida de la facultad

para decretar la práctica de las pruebas consideradas de interés para el procedimiento Sancionatorio de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.

Que, la Ley 1333 de 2009, señala en su “Artículo 19; **“Notificaciones.** *En las actuaciones sancionatorias ambientales, las notificaciones se surtirán en los términos del Código de Procedimiento Administrativo.*”

Que, en cuanto a los descargos y los términos de Ley para la presentación de los mismos, el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, dispone:

“ARTÍCULO 25. DESCARGOS. *Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.*

Que, el tratadista Nattan Nisimblat en su libro “Derecho Probatorio - Principios y Medios de Prueba en Particular Actualizado con la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1437 De 2011”, en las páginas 131 y 132, al respecto de los requisitos intrínsecos de la prueba, definió lo siguiente:

“2.3.1.1. Conducencia.

La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un determinado acto jurídico (elementos ad substantiam actus y ad probationem). (...)

2.3.1.2. Pertinencia.

Inutile est probare quod probatum non relevant y frustra probatum non relevant. La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada. Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el “tema probatorio”. Son ejemplos de pruebas impertinentes las que tienden a demostrar lo que no está en debate (...)

2.3.1.3. Utilidad.

En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Para que una prueba pueda ser considerada inútil, primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia. En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.”

Que, el Consejo de Estado¹, en providencia del 19 de agosto de 2010, se refirió de la siguiente manera frente a la noción de **conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad de las pruebas:**

¹ Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, CP Hugo Fernando Batidas Barcenás, del 19 de Agosto de 2010, Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093)

“El artículo 168 del C.C.A. señala que, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 178 del C. de P.C. dispone: “Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad.

Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley.”

Con base a la anterior definición, es necesario señalar lo que el Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, la cual determina en cuanto a las pruebas:

1. Que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Artículo 164 del C.G.P.)
2. Que sirven como pruebas, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (Artículo 165 del C.G.P.)
3. Que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba (Artículo 167 del C.G.P.)
4. Que las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará *in limine* las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas (Artículo 168 del C.G.P.)

Que la Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la época actualmente de Desarrollo Sostenible, señaló en su artículo 9° los estándares máximos permisibles de emisión de ruido, entendiéndose emisión de ruido según el anexo 1° de dicha norma como:

“... la presión sonora que generada en cualesquiera condiciones, trasciende al medio ambiente o al espacio público.”

Que, la Resolución 6919 de 2010, expedida por esta Secretaría, estableció el Plan Local de Recuperación auditiva en el Distrito Capital con el objeto de controlar y reducir las emisiones de ruido de manera progresiva y gradual conforme a la clasificación de las Localidades más afectadas.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CASO CONCRETO

Que, en lo concerniente a las actuaciones administrativas obrantes en el expediente No. **SDA-08-2013-1479**, perteneciente al proceso adelantado en contra de **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No 53.068.398, y registrada como persona natural con matrícula mercantil No 02122546 del 21 de julio de 2011, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER**, ubicado en la calle 151C No 114 D-08 de la localidad de Suba de esta ciudad, es procedente hacer un análisis del concepto de la prueba y sus requisitos para así poder decretar o incorporar las mismas.

Que, para el caso que nos ocupa la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No 53.068.398, presentó escrito de descargos en contra del Auto No. 05573 del 30 de octubre de 2018, mediante radicado No. 2018ER293958 del 12 de diciembre de 2012, siendo esta la oportunidad procesal con que contaba la investigada para aportar y solicitar la práctica de pruebas que estimara conducentes, pertinentes y útiles, de conformidad a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009; y por ende esta Autoridad Ambiental determina que es procedente hacer un análisis de las pruebas y sus requisitos para así poder decretar o incorporar las mismas.

Que, descendiendo al caso *sub examine*, ésta Secretaría encuentra que se aportaron como prueba, fotografías donde se evidencian los cambios y remodelaciones que se realizaron en el establecimiento **LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER**, con el fin de disminuir los niveles de ruido, y así, evitar que estos no se expandan al exterior.

Que, respecto a las fotografías de las adecuaciones realizadas al referido establecimiento, allegadas mediante escrito de descargos, esas no son conducentes ni útiles, por cuanto, no desvirtúan el hecho acaecido el día de la visita de seguimiento y control de ruido realizada el 26 de abril de 2013, que dio origen al concepto técnico No. 04734 del 23 de julio de 2013, toda vez que las infracciones en materia de ruido son de ejecución instantánea, es decir, que desde el momento en que se verificó el incumplimiento de lo estipulado en la Resolución 627 de 2006 así posteriormente, haya cesado el daño en el lugar de los hechos, con forme a esto, esta Secretaría tiene la potestad para iniciar el proceso sancionatorio ambiental contemplado en la ley 1333 de 2009, así posteriormente, se hayan tomado las medidas correctivas que disminuyan o cesen el

daño en el lugar de los hechos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

Que, por todo lo anterior, esta Autoridad Ambiental no decretará como pruebas las solicitadas por la presunta infractora.

Así mismo respecto del radicado No. 2013ER017852 del 19 de febrero de 2013, por el cual la Alcaldía Local de Suba remitió a esta Secretaría copia del derecho de petición presentado por un anónimo, en el cual se pone en conocimiento los presuntos altos niveles de ruido que presentan dos establecimientos de comercio ubicados en la carrera 114 D No 151 A-08 piso 1 y en la calle 151 C No 114 D-14, teniendo en cuenta que se trata de un escrito anónimo, el mismo será tenido como prueba, pues dentro del presente proceso sirve como la fuente de conocimiento para esta Autoridad Ambiental, acerca de la comisión de una posible infracción ambiental, es decir su contenido no será determinante en el momento de proferir una decisión de fondo, más visto de manera integral junto como los demás medios de prueba decretados y practicados, otorgarán los elementos de juicio necesarios para resolver el proceso sancionatorio. En este sentido así lo preciso la Corte Constitucional en sentencia T-388 del diecisiete (17) de mayo de dos mil once 2011 M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, en lo siguiente:

“En cuanto al valor probatorio otorgado a los documentos anónimos, encuentra esta Sala que éstos sirvieron como elementos de valoración, sin que resultaran determinantes al momento de adoptar una decisión definitiva en este asunto, ya que, como se explicó, se dio especial relevancia a los primigenios señalamientos hechos por los denunciantes e incluso no se hizo mención a los anónimos en el fallo condenatorio. Cabe advertir que si bien la Corte Suprema otorgó mayor valor probatorio a las denuncias puestas de presente ante el representante del Ministerio Público en Mitú, ello no conlleva necesariamente a la configuración de un defecto fáctico, toda vez que se trató de una interpretación jurídica razonable”

“siendo el anónimo una de las múltiples formas de llevar la noticia criminis al juez, su prudente atención aconseja tenerlo en cuenta únicamente en la medida que pueda conducir al legal acopio de medios de prueba válidos sobre la comisión de un hecho punible y la identidad de los autores o partícipes”.

Que, en consecuencia, esta Secretaría se dispondrá a abrir la etapa probatoria de acuerdo con el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No 53.068.398, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER**, registrado con el número de matrícula mercantil No 02122548, ubicado en la calle 151C No 114 D-08 de la localidad de Suba, incorporando como prueba los siguientes documentos relacionados con el proceso sancionatorio y que forman parte del expediente **SDA-08-2013-1479**, por considerarse conducentes, pertinentes, útiles y legales, a fin de llegar al convencimiento necesario que permita el respectivo pronunciamiento, específicamente los enunciados a continuación:

1. Radicado No. 2013ER017852 del 19 de febrero de 2013, por el cual la Alcaldía Local de Suba remitió a esta Secretaría copia del derecho de petición presentado por un anónimo, en el cual se pone en conocimiento los presuntos altos niveles de ruido que presentan dos establecimientos de comercio ubicados en la carrera 114 D No 151 A-08 piso 1 y en la calle 151 C No 114 D-14.
2. El concepto técnico No. 04734 del 23 de julio de 2013, en el cual se concluyó que el nivel equivalente de emisión de ruido fue de **65,3 dB(A)** en horario Nocturno, para un **Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado**, con sus respectivos anexos tales como:
 - Acta de visita de seguimiento y control de ruido del 26 de abril de 2013.
 - Certificado de calibración electrónica del sonómetro, fabricante QUEST TECHNOLOGIES, modelo: SOUNDPRO DL – 1- 1/3, con No. de serie BLH040026, con fecha de calibración electrónica del 10 de agosto de 2012.
 - Certificado de calibración electrónica del calibrador acústico, QUEST TECHNOLOGIES, modelo CQ -20 con No. serie QOH060018, con fecha de calibración electrónica del 10 de agosto de 2010.

Que, la conducencia de las pruebas relacionadas anteriormente, se fundamenta en que son medios idóneos para demostrar la existencia de los hechos que dieron origen al incumplimiento de normas de carácter ambiental, teniendo en cuenta que así lo señala el Artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica que la Autoridad Ambiental Competente, que para el presente caso es la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales como Visitas Técnicas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

Que, son pertinentes las pruebas en mención, toda vez que demuestran una relación directa entre los hechos acontecidos en tiempo, modo y lugar de la ejecución de la conducta, la cual es instantánea y fue determinada por las mediciones realizadas a las fuentes generadoras de emisión y ejecutadas en la Visita Técnica de Seguimiento y Control Ruido, por sobrepasar los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas ambientales respectivas.

Que, corolario de lo anterior, estas pruebas resultan útiles, puesto que con ellas se establece la ocurrencia de los hechos materia de controversia que aún no se encuentran demostrados con otra, haciendo del concepto técnico No. 07399 del 11 de octubre de 2016, con sus mencionados anexos, los medios probatorios necesarios para demostrar la ocurrencia de los hechos constitutivos de infracción ambiental.

Que, en consecuencia a lo expuesto se tendrá como prueba los documentos relacionados en los incisos anteriores, por ser el medio probatorio conducente, pertinente y útil para el presente caso,

a fin de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental, de conformidad con lo establecido en la parte motiva y resolutive del presente Acto Administrativo.

V. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

Que, es función de la Secretaría Distrital de Ambiente, controlar el cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales, en consecuencia, emprender las acciones de policía que sean pertinentes, y en particular adelantar las investigaciones e imponer las medidas que correspondan a quienes infrinjan las mencionadas normas.

Que, el numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Secretaría para ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Que, así mismo, el numeral 12° ibídem establece como función a la Autoridad Ambiental:

“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.

Que, el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que, de conformidad con lo contemplado en el numeral 1° del artículo 1° de la Resolución 01466 del 24 de mayo de 2018, modificada por la Resolución 02566 del 15 de agosto de 2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en la cual el Secretario Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

“1. Expedir los actos administrativos de impulso relacionados con los procesos sancionatorios.”

Que, en mérito de lo expuesto, la Dirección de Control Ambiental,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. - Abrir pruebas dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Entidad mediante Auto No. 02622 del 17 de octubre de 2013, en contra de la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No 53.068.398, en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado **LICORERA**

Y CIGARRERIA SANTANDER, registrado con matrícula mercantil No. 02122548 del 21 de 2011, ubicado en la calle 151C No 114 D-08 de la localidad de Suba de esta Ciudad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Negar las pruebas solicitadas mediante el radicado No. 2018ER293958 del 12 de diciembre de 2012, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente Auto.

ARTICULO TERCERO. – Ordenar la incorporación al procedimiento sancionatorio ambiental de la siguiente prueba:

1. Radicado No. 2013ER017852 del 19 de febrero de 2013, por el cual la Alcaldía Local de Suba remitió a esta Secretaría copia del derecho de petición presentado por un anónimo, en el cual se pone en conocimiento los presuntos altos niveles de ruido que presentan dos establecimientos de comercio ubicados en la carrera 114 D No 151 A-08 piso 1 y en la calle 151 C No 114 D-14.
2. Concepto técnico No. 04734 del 23 de julio de 2013, en el cual se concluyó que el nivel equivalente de emisión de ruido fue de **65,3 dB(A)** en horario Nocturno, para un **Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado**, con sus respectivos anexos tales como:
 - Acta de visita de seguimiento y control de ruido del 26 de abril de 2013.
 - Certificado de calibración electrónica del sonómetro, fabricante QUEST TECHNOLOGIES, modelo: SOUNDPRO DL – 1- 1/3, con No. de serie BLH040026, con fecha de calibración electrónica del 10 de agosto de 2012.
 - Certificado de calibración electrónica del calibrador acústico, QUEST TECHNOLOGIES, modelo CQ -20 con No. serie QOH060018, con fecha de calibración electrónica del 10 de agosto de 2010.

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora **SHIRLYS JOHANNA OBANDO CAMARGO** identificada con cédula de ciudadanía No 53.068.398, en las siguientes direcciones notificación calle 151C No 114 D- 14 apartamento 102 y calle 151C No 114 D-08 ambas de la localidad de Suba de esta Ciudad, según lo establecido en el artículo 66 y siguientes de la ley 1437 de 2011, código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO.** - La persona jurídica señalada como presunta infractora en el artículo primero del presente acto, su apoderado o autorizado, deberá presentar documento idóneo que permita efectuar la notificación.

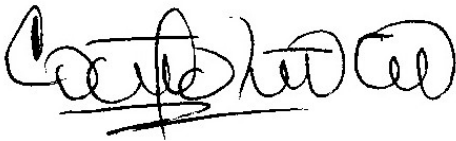
ARTÍCULO QUINTO. - El expediente No **SDA-08-2013-1479**, estará a disposición, de los interesados en la oficina de expedientes de la Secretaría Distrital de ambiente de Bogotá D.C. –

SDA, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO - Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de abril del año 2020



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	C.C: 80016725	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	15/04/2020
---------------------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------

ALEXANDRA CALDERON SANCHEZ	C.C: 52432320	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-0551 DE 2020	FECHA EJECUCION:	15/04/2020
----------------------------	---------------	----------	---------------------------------	------------------	------------

Revisó:

ALEXANDRA CALDERON SANCHEZ	C.C: 52432320	T.P: N/A	CPS: CONTRATO 2020-0551 DE 2020	FECHA EJECUCION:	15/04/2020
----------------------------	---------------	----------	---------------------------------	------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	C.C: 80016725	T.P: N/A	CPS: FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	17/04/2020
---------------------------------	---------------	----------	------------------	------------------	------------